

Ana Laura
Nettel Díaz*

*¿El buen argumento
jurídico depende de la
teoría del derecho?*

Resumen

El propósito de este trabajo es analizar si la calificación de un argumento como bueno en el ámbito del derecho depende de la teoría que se asuma. Consideramos el concepto de validez de cada teoría como un criterio que juega un papel central en la determinación del buen argumento. Me pregunto si los criterios propuestos por la teoría de la argumentación para evaluar los argumentos son suficientes para nuestro ámbito y analizo algunas consecuencias de las diferencias entre las corrientes, respecto de lo que es un buen argumento para dichas teorías.

Abstract

The purpose of this paper is to analyze if the qualification of an argument as good in the field of law depends on the theory that is assumed. I consider the concept of validity of each theory as a criterion that plays a central role in determining the good argument. I wonder if the criteria proposed by the argumentation theory to evaluate the arguments are sufficient for our field and I analyze some consequences of the differences between the currents, with respect to what is a good argument for these theories.

Sumario: Introducción / I. La corriente del derecho natural / II. La corriente positivista del derecho / III. Los buenos argumentos en la argumentación jurídica / IV. Los criterios de los buenos argumentos en la teoría de la argumentación “*tout court*” y el ámbito jurídico / V. Conclusión / Fuentes de consulta

* Profesora-Investigadora del Departamento de Derecho, UAM-Azcapotzalco.

Introducción

El derecho es sin discusión un fenómeno social que puede ser observado a través de las muchas consecuencias que tiene para nuestras vidas. El interés para comprender al derecho se remota a más de veinticinco siglos. Los intentos para describirlo son numerosos y tales son los puntos de vista desde los que puede ser percibido. Si el derecho es el mero ejercicio del poder del soberano o el instrumento de defensa del pueblo contra su arbitrariedad, ello corresponde a dos puntos de vista opuestos de lo que podemos esperar de la vida como ciudadanos.

La expresión “argumentación jurídica” puede sugerir que hubiera una sola argumentación jurídica, es decir, que existen ciertos requerimientos que son comunes a todo argumento jurídico para que sea un buen argumento. Sin embargo, mi propósito en este trabajo es analizar si lo que es considerado un buen argumento en el campo jurídico varía en concordancia con el marco teórico en el que se encuadra, es decir, me pregunto si las presuposiciones teóricas que fundan las diferentes corrientes de la teoría del derecho exigen diferentes criterios para considerar un argumento como bueno.

Sería una enorme tarea recorrer todos los elementos que se han considerado a lo largo de la historia como parte del concepto de derecho. Por lo que en esta ocasión me centraré principalmente en uno de los elementos que han sido constantemente considerados en la construcción del concepto del derecho: el origen de la validez del derecho.

Existe una clara dicotomía en el pensamiento jurídico entre, por una parte, percepciones del derecho que lo ven esencialmente como una expresión de valores derivados de una específica fuente, como por ejemplo la Naturaleza (con mayúscula), la voluntad de Dios, la Razón, la voluntad de la comunidad, la historia política; y, por otra parte, corrientes que ven al derecho esencialmente como la expresión de la capacidad regulatoria del poder del Estado.

Primero, daré, en aras de la brevedad, una descripción, tal vez demasiado gruesa, de las dos principales corrientes de la teoría jurídica: la Teoría del derecho natural y el Positivismo jurídico. Y, en segundo lugar, analizaré las consecuencias de las diferencias entre dichas teorías del derecho con respecto a qué sería un buen argumento desde el punto de vista de dichas teorías.

I. La corriente del derecho natural

La teoría del derecho natural no es solamente la primera en la historia de la teoría del derecho, sino también la que más ha durado. Podemos situar sus comienzos en los tiempos de la Grecia clásica; a pesar de los repetidos anuncios de su inminente muerte, hoy en día existen importantes desarrollos de la teoría que están presentes

en la literatura de dicho campo. Por lo que es más correcto hablar de una corriente que de una sola Teoría del derecho natural. Sin embargo, a lo largo de las diferentes concepciones del concepto del derecho que sus seguidores han producido, existen importantes puntos de coincidencia. Lo que caracteriza a las diferentes Teorías del derecho natural, es en primer lugar la idea de que hay una relación necesaria entre el derecho y los valores. Estos valores son considerados definitiva y objetivamente válidos, y para algunos de ellos, válidos en todos lugares y tiempos, ya sea que la fuente de validez sea Dios, la Razón o la voluntad de la comunidad o del poder político. La validez del derecho, tanto en cuanto institución como la de su aplicación, proviene entonces, en primera instancia, de la coherencia con dichos valores.

II. La corriente positivista del derecho

Los orígenes del positivismo jurídico se sitúan en la aspiración del siglo XVIII de una ciencia del derecho que pudiera construir un análisis científico y sistemático de los elementos del derecho. A pesar de la diversidad de énfasis que se han dado a lo largo de los distintos desarrollos históricos del positivismo jurídico, las tempranas objeciones que éste hace hacia la corriente del derecho natural son centrales para su comprensión; unas de ellas son las de Jeremías Bentham y después de él las de John Austin. Ellos primeramente criticaron la idea de que el derecho está fundado en la moralidad; la formulación de Austin se transformó casi en un eslogan:

La existencia del derecho es una cosa; su mérito o demérito es otra. Que lo tenga o no lo tenga es una cuestión; que lo sea o no lo sea en acuerdo con un estándar asumido, es una cuestión diferente. Una ley que existe actualmente, es una ley, aunque suceda que no nos guste[...].¹

Diferentes positivismos han surgido desde esta declaración fundacional. Sin embargo, la “tesis de la separación” sigue estando presente aunque con énfasis distintos. Los positivistas, a pesar de sus diferencias, están de acuerdo por lo menos en la importancia de sostener que la ley, al ser puesta por los seres humanos, debe ser claramente separada de los principios morales “no establecidos”, es decir legislados o regulados de alguna forma. La insistencia en la “tesis de la separación” (Austin, Bentham, Kelsen, Hart, y muchos otros) pone la fuente de la autoridad del derecho en la misma ley. Esta auto-referencialidad está presente a pesar de las diferentes formas en las que se la ha sostenido: el derecho es lo que el soberano dice; el derecho es lo que los jueces y otros aplicadores del derecho deciden; o el derecho es lo que está de acuerdo con lo que ha sido prescrito por una autoridad competente, etcétera.

¹ J. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Londres, John Murray, Albemarle Street, 1832. <http://www.koeblergerhard.de/Fontes/AustinJohnTheprovinceofjurisprudencedetermined1832.pdf>, (consultado el 1 de octubre de 2017).

Entonces, en cualquier caso para los positivistas, la autoridad del derecho está ligada, con una competencia para ordenar, en última instancia con el poder, ya sea el de la coerción o el de la presión social. En resumen, la validez y consecuentemente, la autoridad del derecho, no proviene de una fuente externa, a diferencia de la Teoría jurídica del derecho natural, el derecho es en sí mismo una razón para actuar.²

III. Los buenos argumentos en la argumentación jurídica

Existe consenso respecto de que la práctica del derecho es de tipo argumentativo: jueces y abogados proceden dando razones para sostener sus pretensiones y decisiones pero los legisladores y otros aplicadores del derecho también están obligados a producir argumentos para sostener sus decisiones.

Existe consenso respecto de que la práctica del derecho es de tipo argumentativo: jueces y abogados proceden dando razones para sostener sus pretensiones y decisiones pero los legisladores y otros aplicadores del derecho también están obligados a producir argumentos para sostener sus decisiones.

El razonamiento o argumentación jurídica también es de gran interés para los académicos que trabajan en el ámbito de la teoría del derecho. Debido a que el foco de atención de la reflexión sobre la argumentación jurídica se ha dirigido principalmente a la decisión judicial, muchos teóricos de la argumentación ajenos a la teoría del derecho se inclinan a considerar que la argumentación jurídica es un campo de la argumentación erística, es decir, dirigida únicamente a ganar.³ Desde este punto de vista el objetivo que hay que alcanzar sería persuadir para ganar, y por ello una perspectiva estrictamente retórica podría ser vista como satisfactoria: el

mejor argumento es aquel que logra persuadir al juez sin ocuparse de los medios utilizados para lograr el fin.

Esto último parecería suficiente desde una perspectiva teórica positivista formalista. Para un autor tan importante como Hans Kelsen, los argumentos de la interpretación que prevalece en la decisión de última instancia, cuando ya no procede ningún recurso, son los buenos en el sentido de que son los que van a tener efectos jurídicos. Recordemos que desde la perspectiva de la pureza metódica defendida por Kelsen, el teórico del derecho no ha de interesarse en el contenido de las normas, porque considera que su función es puramente descriptiva y ello porque rechaza la

² J. Raz, *Practical Reasons and Norms* (1975), Oxford, Oxford University Press, 2ª edición, 1990.

³ D. Walton, *The New Dialectic. Conversational Contexts of Argument*, Toronto, University of Toronto Press Incorporated, 1998.

posibilidad de una discusión racional respecto de valores y se interesa por hacer una teoría pura del derecho.

Kelsen sostiene que una norma es un marco de interpretación normativa y que dentro de dicho marco hay diversas interpretaciones posibles; para él no interesa cuál de ellas es la mejor, interesa cuál quedará firme y producirá consecuencias jurídicas. Así, podemos decir que para Kelsen la argumentación interpretativa que prevalece es la buena porque es aquella que convenció o persuadió⁴ al juez o, en general, al aplicador jurídico. Debo aclarar que esta inferencia acerca de lo que sería un buen argumento no está explícita en Kelsen pero considero que se puede inferir de su posición acerca de la interpretación.⁵

Para los positivistas que sostienen la concepción realista del derecho, es derecho lo que deciden los aplicadores del derecho (jueces y otros funcionarios aplicadores); lo que los lleva a considerar que lo que debe interesar al teórico del derecho es hacer predicciones acerca de lo que las Cortes harán de hecho y nada más pretencioso.⁶ De nuevo, pero por razones diferentes de las de Kelsen, para los realistas el último criterio para la evaluación de un argumento que sostiene una interpretación es que éste sea seguido por los actores jurídicos en sus decisiones; ello, porque siguiendo la expresión de Alf Ross, solamente así, al ser parte del derecho en acción dicha decisión será *derecho vigente*⁷ que es lo que interesa a las teorías realistas.

El fuerte compromiso de los positivistas con la idea de la indeterminación de la ley seguirá presente pero en una versión más suave en uno de los más importantes debates en la teoría del derecho durante la segunda mitad del siglo pasado: el debate entre H.L.A. Hart y R. Dworkin. Resumiéndola de manera breve, la cuestión puede reducirse a si los jueces tienen discreción a crear la ley o no. Para Hart el hecho de que las normas tengan diversos tipos de indeterminaciones, da la posibilidad al juez, cuando una regla no es clara, a elegir la interpretación que considera adecuada por las razones de su predilección.⁸ El joven Dworkin por el contrario defiende que siempre se puede encontrar una respuesta que es la más correcta, ésta es la que el juez debe aplicar, posición que se ha llamado “*la tesis de la respuesta correcta*”. Y ello es así porque, de nuevo brevemente, para Dworkin el derecho no es solamente una cuestión de reglas ya que también comprende dentro del derecho a los principios

⁴ Respecto a la relación entre argumentación y persuasión, véase: G. Roque y A.L. Nettel (eds.), *Persuasion et Argumentation*, París, Classiques Garnier, 2015.

⁵ Cf., H. Kelsen, *Teoría pura del derecho*, México, UNAM, 1982, capítulo VIII, pp. 349-356.

⁶ Cf., J. Burton Steven (ed.), *The Path of the Law and Its Influence The Legacy of Oliver Wendell Holmes, Jr.*, Cambridge, Cambridge University, 2000. <http://assets.cambridge.org/97805216/30061/sample/9780521630061WSN01.pdf>, consultado el 30 de septiembre de 2017.

⁷ A. Ross, *Sobre el derecho y la justicia*, Buenos Aires, Eudeba, (trad.), G. Carrió, 2ª edición, 1970, pp. 29-57.

⁸ H.L.A. Hart, *El concepto del derecho*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963, capítulos I, pp. 1-122, VI, pp. 125-154 y VII, pp. 155-182.

que son aplicados cuando la regla no es clara, lo que él llama “los casos difíciles” (*hard cases*).⁹

Dworkin compara al derecho con la escritura de una novela colectiva, es decir, que se va construyendo, escribiendo entre varios autores; sin embargo, cada uno debe tomar en cuenta lo que el otro ha escrito para continuar la novela al escribir su parte. De esta comparación surge la idea dworkinana de que el derecho es una empresa interpretativa: cada autoridad que aplica el derecho, interpreta la o las normas concernientes al caso concreto, y al hacer esto hace su contribución al derecho. Al igual que en la novela colectiva, en el caso del derecho, si bien cada parte (decisión de interpretación) es escrita por una persona diferente, cada uno que contribuye al interpretar la(s) norma(s) para aplicarla(s), no actúa aisladamente, debe tomar en cuenta y respetar lo que los anteriores intérpretes han hecho; a ello lo designa Dworkin “*integrity*”, integridad (término que tal vez podría mejor entenderse con el de coherencia), ya que el nuevo partícipe no puede ser indiferente a lo que sus predecesores ha interpretado. Así, la *integridad* es considerada un valor jurídico fundamental. Dicho valor “*integrity*” es un criterio que debe estar presente tanto en la legislación como en la adjudicación,¹⁰ es un valor democrático porque reclama coherencia con los valores de la comunidad.¹¹ En un “caso difícil” (“*hard case*”), es decir, aquel que no cuenta con un consenso claro para resolverlo, no se tiene una respuesta consistente en un “sí” o en un “no” dada por una regla, de tal suerte que el juez debe encontrar, entre los principios de la comunidad (mismos que, insisto, Dworkin considera que forman parte del derecho) aquellos que dan la mejor interpretación de lo que es la ley de la comunidad, o como lo expresa el mismo Dworkin, la que pone al derecho bajo su mejor luz, es decir, la interpretación que dará como resultado el mejor derecho. Mientras que las reglas son o no parte del derecho y en consecuencia deben o no aplicarse, los principios tienen una dimensión de peso o importancia; es por ello que pueden no ser aplicables a un caso particular y seguir siendo parte del derecho y por lo tanto ser aplicables a otros casos.¹²

En consecuencia, un buen argumento bajo la teoría dworkiniana del derecho, requeriría integridad particularmente en los casos difíciles y en la *lege ferenda*, es decir, coherencia con los valores políticos de la comunidad como criterio de buen argumento.

⁹ Cf., R. Dworkin, “¿Es el derecho una cuestión de reglas?”, versión castellana de Javier Esquivel y Juan Rebollo, México, *Critica*, núm. 5, 1977, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, *passim*. R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1978, pp. 31 y sig.

¹⁰ Por adjudicación podemos entender decisiones por las que se decide un caso fundándose en la ley, la palabra viene del latín *adjudicare*, decir aplicar la ley.

¹¹ R. Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1986.

¹² “A principle may not prevail but that does not mean that it is not a principle of our legal system, because in the next case, when these contravening considerations are absent or less weighty, the principle may be decisive. All that is meant, when we say that a particular principle is a principle of our law, is that the principle is one which officials must take into account if it is relevant, as a consideration inclining in one direction or another”, R. Dworkin, *Taking Rights seriously, op. cit.*, p. 26.

En la cultura latina, una de las teorías del derecho que es debatida con mayor interés en la actualidad es sin duda la de Luigi Ferrajoli: el *positivismo crítico*. Se trata de una teoría del derecho sin pretensiones de universalidad que se refiere específicamente a una etapa del desarrollo del derecho de algunos países en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. En la etapa del desarrollo del *Estado de derecho constitucional*, como él lo llama, las constituciones de dichos Estados han adquirido un carácter rígido respecto de los requisitos para su modificación y han integrado un catálogo de derechos considerados fundamentales; de tal manera, dichos derechos devienen vinculantes y su control está a cargo del órgano jurisdiccional. De ello se sigue que el criterio de validez y por tanto la corrección de una decisión de aplicación normativa ya sea jurisdiccional o legislativa, debe cumplir en su argumentación con la consideración (explícita o implícita) de los derechos fundamentales para que el criterio de validez sustancial sea satisfecho. Dicho de otra forma, de acuerdo con la teoría del positivismo crítico de Luigi Ferrajoli, un buen argumento sería aquel que en el sentido de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución del Estado que se trate; así, la decisión argumentada de tal manera contará con lo que él llama “validez sustancial”.

IV. Los criterios de los buenos argumentos en la teoría de la argumentación “*tout court*” y el ámbito jurídico

¿Cuáles son los criterios para evaluar argumentos? Es uno de los debates centrales dentro de la teoría de la argumentación. Para responder a esta cuestión muchos han centrado su búsqueda en la naturaleza de la empresa argumentativa. Si la empresa es de carácter retórico, lo que cuenta es persuadir; si es pragmática, entonces lo que cuenta es alcanzar el objetivo; y si su naturaleza es epistémica, la producción de conocimiento es el signo de su buen éxito. Todas estas posiciones han sido el objeto de furibundas críticas.¹³ Sin embargo, la posición más criticada desde Platón hasta nuestros días, ha sido la posición retórica, es decir, la que sostiene que el propósito es lograr persuadir, y a pesar de todo sigue en pie. En el ámbito judicial, sin duda el ámbito de la argumentación jurídica al que los teóricos han puesto mayor atención, persuadir es el propósito que está en el fondo. En efecto, se trata de obtener el asentimiento del juez a la posición defendida. Sin embargo, hay que subrayar que ello no quiere decir que el buen argumento en este ámbito es el que persuade por cualquier medio, por lo que sí interesa ocuparse de la calidad de los argumentos más allá del propósito de obtener el asentimiento a la posición defendida, sea ésta en el ámbito judicial o en asuntos de *lege ferenda*.

¹³ Sobre la relación entre persuasión y argumentación, cf. G. Roque y A.L. Nettel (eds.), *Persuasion et Argumentation*, *op. cit.*

Dentro de la teoría de la argumentación *tout court*, de requisitos como son los tres propuestos por Blair y Johnson:¹⁴ aceptabilidad, carácter suficiente y pertinencia; criterios indudablemente atendibles por su utilidad para evaluar un argumento en cualquier ámbito de la reflexión, cuando se trata de considerar bueno un argumento en el ámbito jurídico, además de cumplir con los criterios identificados por los teóricos de la argumentación, la bondad del argumento estará en relación con la teoría del derecho que se asuma como correcta o aceptable; misma que como hemos tratado de mostrar, influencia el carácter del argumento en función de las características que la teoría dé a dicha institución, ello debido a que cada teoría le adjudica pretensiones distintas que a final de cuentas se refieren a lo que se piensa acerca del Derecho.

Dicho esto, he de precisar que, si algunos teóricos de la argumentación se han dado a la misión de determinar los criterios necesarios y suficientes para identificar o distinguir los buenos argumentos de los malos, yo no comparto dicha empresa debido a que: a) cuando se trata de argumentos donde están en juego valores, disiento de dicha posición porque no creo en la existencia de valores absolutos, lo que no me impide creer en la posibilidad de discutir racionalmente acerca de la prevalencia de un valor en un contexto y situación dadas; b) también disiento cuando se trata de criterios científicos pues, para decirlo rápidamente, soy una convencida de que toda observación está cargada de teoría y de que la verdad científica es provisional.^{15 16}

Hemos insistido en la dependencia entre buen argumento y la teoría del derecho de la que se parta, para abundar en ello cabe hacer referencia al aporte de Ch. Hamblin¹⁷ a la teoría de la argumentación. Hamblin pone de manifiesto que criterios como aceptabilidad y corrección de

un argumento, criterios que como hemos visto son propuestos de manera general por los teóricos, son dependientes del contexto, en el caso que nos ocupa el contexto estaría dado por la teoría del derecho de la que se parta. En efecto, Hamblin muestra la relevancia del contexto al poner en cuestión la idea de falacia, tal como la propuso Aristóteles cuando en *Refutaciones sofísticas* propone una lista de argumentos que pareciendo correctos, no lo

Hamblin sostiene que los argumentos considerados por los teóricos (además de Aristóteles, Locke y otros) como falaces no siempre lo son pues en ciertos contextos pueden ser perfectamente aceptables.

¹⁴ Cf., J. A. Blair y R. H. Johnson, *Logical Self-Defense*, Nueva York, Amsterdam, Bruselas, International Debate Education Association, 2006.

¹⁵ Cf., N. R. Hanson, *Patterns of Discovery*, Cambridge, Cambridge University Press [1958], 1965, p. 19.

¹⁶ Cf., A.L. Nettel, "La intervención de la ciencia en el derecho", en: *Memoria del seminario sobre la interpretación constitucional y sus perspectivas (12, 13 y 14 de octubre 2010)*, México, Centro de Estudios de Derecho e Interpretaciones Parlamentarias, 2010, pp. 25-36.

¹⁷ Cf., Ch. Hamblin, *Fallacies*, Londres, Methuen & Co., 1970.

son. Hamblin sostiene que los argumentos considerados por los teóricos (además de Aristóteles, Locke y otros) como falaces no siempre lo son pues en ciertos contextos pueden ser perfectamente aceptables. Por ejemplo, un argumento *ad hominem* considerado normalmente falaz, cuando se trata de votar por una persona para un puesto de confianza puede resultar especialmente pertinente. Así en el contexto de por ejemplo una concepción del derecho que considera al catálogo de los derechos fundamentales de la Constitución como parte del derecho, por tanto condición de la validez de una decisión, la argumentación de una decisión que no sea conforme con dichos derechos no es una buena argumentación. Por el contrario en el contexto de una teoría formalista dicha decisión aunque no sea respetuosa de dichos derechos puede ser considerada válida y por tanto aceptable en el sentido de aplicable, si no ha sido recurrida en el plazo pertinente.

V. Conclusión

Las teorías del derecho construyen concepciones acerca de lo que es el derecho; estas concepciones cuando son relativamente estables son aceptadas como correctas; de ello se sigue que aportan a las autoridades en general y a las jurídicas en particular (pero también a los abogados y a los ciudadanos) una concepción del derecho que tiene ciertamente consecuencias para la manera en que se actúa o se espera que se actúe al argumentar las decisiones de los casos cuyos efectos jurídicos están en cuestión. Las características que cada diferente teoría atribuye al derecho no quedan en el *Topus Uranus* para la estimulación intelectual de los teóricos del derecho, dicho de otra forma, no son anodinas, tienen repercusión en el mundo de la práctica del derecho. Desde el momento que son aceptadas como correctas, dan lugar a ciertas expectativas en los destinatarios porque se espera que las autoridades actúen en consecuencia.

Como se ha tratado de hacer notar a lo largo de este trabajo, caracterizar un argumento jurídico como bueno o malo, no se da en el vacío: los criterios considerados tienen como referente una teoría dada (la que es considerada como correcta o aceptable). Sin embargo en la mayor parte de los casos esta consideración se hace de manera implícita, es decir sin mencionar abiertamente la teoría que se sostiene.

Fuentes de consulta

Bibliográficas

Blair, J. A. y Johnson R. H., *Logical Self-Defense*, New York, Amsterdam, Bruselas, International Debate Education Association, 2006.

Dworkin, R., *Taking Rights Seriously*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1978.

Sección Doctrina

- Dworkin, R., *Law's Empire*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1986.
- Ferrajoli, L., *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal* (1989), trad. Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, Rocío Cantero Bandrés, 7ª ed., Madrid, Trotta, 2005.
- Hamblin, Ch., *Fallacies*, Londres, Methuen & Co., 1970.
- Hanson N. R., *Patterns of Discovery*, Cambridge, Cambridge University Press [1958], 1965.
- Hart, H.L.A., *El concepto del derecho*, 2ª. ed., México, Editorial nacional, 1978.
- Kelsen, H., *Teoría pura del derecho*, México, UNAM, 1982.
- Raz, J., *Practical Reasons and Norms* [1975], 2ª ed., Oxford University Press, 1990.
- Ross, A., *Sobre el derecho y la justicia*, 2ª ed., Buenos Aires, Eudeba, (trad.), G. Carrió, 1970.
- Walton, D., *The New Dialectic. Conversational Contexts of Argument*, Toronto, University of Toronto Press Incorporated, 1998.

Electrónicas

- Austin, J., “The Province of Jurisprudence Determined”, Londres, John Murray, Albemarle Street, 1832. <http://www.koeblergerhard.de/Fontes/AustinJohnTheprovinceofjurisprucedetermined1832.pdf> Consultado el 1 de octubre del 2017.
- Burton Steven J. (ed.), *The Path of the Law and Its Influence The Legacy of Oliver Wendell Holmes, Jr.*, Cambridge, Cambridge University, 2000. <http://assets.cambridge.org/97805216/30061/sample/9780521630061WSN01.pdf>. Consultado el 30 de septiembre de 2017.

Hemerográficas

- Dworkin R., “¿Es el derecho una cuestión de reglas?”, versión castellana de Javier Esquivel y Juan Rebolledo, *Crítica*, núm. 5, 1977, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas.
- Wendell Holmes, O. Jr., “The Path of the Law,” *Harvard Law Review*, vol. 10, 1897.